



Asamblea General

Distr. general
7 de agosto de 2015
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
23^{er} período de sesiones
2 a 13 de noviembre de 2015

**Informe nacional presentado con arreglo al
párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21
del Consejo de Derechos Humanos***
Australia

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.



Introducción

1. Australia es un estado de derecho y cuenta con una sólida tradición de respeto de los derechos y libertades individuales. Tiene también un largo historial de defensa y apoyo de los derechos humanos en el plano internacional¹. Esto refleja los valores nacionales australianos y la opinión de que la protección y la promoción de los derechos humanos son componentes esenciales de los esfuerzos de carácter mundial por lograr una paz duradera, la seguridad, la libertad y la dignidad para todos. Australia sigue avanzando en la protección de los derechos humanos y es consciente de que es preciso un esfuerzo constante para mantener las normas y dar respuesta a los problemas existentes.

2. El Gobierno de Australia acoge con agrado la oportunidad de participar en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y de examinar los progresos alcanzados por el país en la protección y promoción de los derechos humanos.

3. Las prioridades nacionales de Australia figuran en el capítulo I del informe. En el capítulo II se describen la metodología y el proceso de consulta. El capítulo III contiene información básica sobre los marcos normativo e institucional de Australia, e informa en detalle acerca de todas las actualizaciones y enmiendas de estos marcos desde el primer EPU de Australia en 2011. En el capítulo IV se explica pormenorizadamente el seguimiento que se ha dado al EPU anterior, así como los logros y lo que queda por hacer.

I. Prioridades nacionales (recomendaciones 49, 145)

4. El Gobierno de Australia concede una gran importancia a la promoción de los derechos civiles y políticos. Esto incluye el fomento de medidas destinadas a proteger la libertad de expresión, la libertad de religión y otros derechos y libertades reconocidos en el *common law* a los que no se ha prestado suficiente atención a nivel nacional en los últimos años; y complementa la prioridad que asigna el Gobierno a asegurar el empoderamiento económico de todos los australianos, a través de políticas de promoción del crecimiento económico y programas concretos para mejorar la situación de colectivos específicos (o de determinados grupos de la comunidad).

5. Como parte de esos esfuerzos, Australia designó en 2013 a un Comisionado de Derechos Humanos a tiempo completo para que la Comisión de Derechos Humanos de Australia prestase suficiente atención a los derechos civiles y políticos, y a la lucha contra la discriminación.

6. El Gobierno de Australia reconoce que el ejercicio de esos derechos debe poder hacerse sin que exista discriminación, de modo que las personas puedan disfrutar de sus derechos en pie de igualdad con los demás. El Gobierno de Australia solicitó recientemente a la Comisión que llevase a cabo una investigación sobre las prácticas, las actitudes y las leyes federales que afectan a la participación en pie de igualdad de los australianos de edad y las personas con discapacidad en el empleo.

7. El empoderamiento de las personas con discapacidad mediante, entre otras medidas, la introducción del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, y la investigación mencionada anteriormente, constituyen una prioridad para Australia. También continúa otorgándose prioridad a la eliminación de las diferencias entre los australianos indígenas y los no indígenas en materia de salud, educación y empleo, así como a la labor para que en la Constitución se reconozca a los australianos indígenas como los primeros pueblos de Australia. El Gobierno también se ha comprometido a fomentar la igualdad entre los géneros y la reducción de la violencia contra la mujer.

8. Australia contribuye a la promoción de los derechos humanos en el plano internacional y prevé presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 2018 y 2020. En el plano internacional, Australia da prioridad a la libertad de expresión, la igualdad entre los géneros, la buena gobernanza y el fomento de la capacidad en nuestra región.

II. Metodología y consulta (recomendación 143)

9. Tras la presentación de su primer EPU, Australia aceptó —en parte o en su totalidad— 137 recomendaciones. Ha aplicado (en parte o en su totalidad) o está aplicando más de 130 de ellas. Los epígrafes de este informe se basan en esas recomendaciones.

10. Al igual que la respuesta de Australia a su primer examen, el presente informe nacional fue elaborado tras la celebración de consultas en todo el Gobierno australiano y los gobiernos de los estados y territorios. Durante el Foro Anual de ONG sobre Derechos Humanos del Gobierno australiano y tras su celebración se solicitó la opinión de las principales organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre una versión preliminar del informe. El Fiscal General de Australia, el Honorable Senador y Letrado de la Corona George Brandis, también se reunió posteriormente con destacadas ONG para deliberar sobre el informe y se ha comprometido a colaborar con las ONG a lo largo de todo el proceso. Tras el segundo EPU de Australia, el Gobierno tiene la intención de dialogar una vez más con las ONG y la Comisión de Derechos Humanos de Australia en relación con las recomendaciones que reciba.

III. Antecedentes

11. Australia es una democracia constitucional federal que opera en el marco del estado de derecho, y cuenta con una sólida protección de los derechos humanos y un rico patrimonio multicultural. Se estima que residen en el país unos 23,6 millones de personas y que más de una cuarta parte nacieron fuera de Australia. Los pueblos indígenas representan el 3% de la población. Hay aproximadamente 4,37 millones de niños con edades comprendidas entre los 0 y los 14 años, es decir, constituyen el 19% de la población. Alrededor del 20% de los residentes en Australia tienen 65 años o más.

12. El Gobierno de Australia está operando en un entorno fiscal de recursos limitados y ha experimentado recientemente importantes reducciones de los ingresos. Esta situación hace que el Gobierno se vea obligado a establecer prioridades a la hora de asignar financiación y a buscar en toda la administración áreas en las que se puedan reducir gastos.

A. Constitución – Reconocimiento de los australianos indígenas en la Constitución (recomendaciones 103 a 105 y 107)

13. El Gobierno de Australia está firmemente comprometido con la celebración de un *referendum* sobre el reconocimiento de los australianos indígenas en la Constitución. Con ello se reconocería en el documento fundacional de la nación la importancia de los primeros pueblos de Australia. El Primer Ministro ha indicado que espera que el *referendum* se celebre a más tardar el 27 de mayo de 2017, fecha que marca el 50º aniversario del *referendum* de 1967. En el *referendum* de 1967, los australianos votaron abrumadoramente a favor de permitir que el Gobierno Federal

promulgase leyes para los australianos indígenas y eliminase la prohibición de incluir a los indígenas australianos en el censo de población.

14. En marzo de 2015, el Parlamento de Australia prorrogó la fecha de derogación de la legislación que reconocía a los australianos indígenas como los primeros habitantes de Australia, y renovó su compromiso de trabajar para la celebración de un *referendum*. El Gobierno australiano sigue proporcionando financiación para una campaña comunitaria de concienciación y búsqueda de apoyo.

15. Un comité parlamentario sobre el reconocimiento de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en la Constitución está recabando el apoyo de múltiples partidos a propuestas de *referendum* específicas y está determinando los pasos a seguir para que el *referendum* tenga éxito. Ese comité parlamentario presentó su informe final al Parlamento el 25 de junio de 2015. El Gobierno estudiará las recomendaciones formuladas en dicho informe.

B. Protección jurídica (recomendaciones 17 a 21)

16. Australia cuenta con un sistema constitucional federal en el que el Gobierno federal, los seis estados y los dos territorios autónomos comparten o se reparten entre sí los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Una serie de mecanismos garantizan la protección de los derechos humanos en todo el país.

17. En el ordenamiento jurídico de Australia, el reconocimiento y la protección de muchos derechos y libertades dimanan del *common law*. Esta fuente de derecho se basa en la creación de precedentes jurídicos sobre diversas cuestiones o de interpretaciones de la ley que han de ser aplicadas por los tribunales y las cortes de justicia. El *common law* ha dado origen a interpretaciones legales que sirven para proteger los derechos humanos. Al interpretar la legislación, los tribunales dan por sentado que el Parlamento no pretende interferir en los derechos humanos fundamentales. Otro principio que se aplica a los casos ambiguos es que los tribunales presumen una intención de conformidad de la legislación con las normas establecidas del derecho internacional, incluidas las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos.

18. Existen mecanismos en el plano federal, estatal y territorial que tratan de asegurar que las administraciones actúen de manera coherente con las obligaciones internacionales de Australia. Es un requisito legal que la legislación federal vaya acompañada de una declaración de compatibilidad con los derechos humanos. Este proceso favorece que se tengan en cuenta los derechos humanos en la formulación de leyes y políticas, desde sus fases iniciales y durante todo el ciclo de vida.

19. La legislación nacional también protege los derechos humanos. Por ejemplo, las leyes contra la discriminación en todas las jurisdicciones garantizan los derechos a la no discriminación y la igualdad, y la Ley de Protección de la Intimidad de 1988 vela por el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada. Dos jurisdicciones australianas han promulgado cartas de derechos humanos.

C. Derechos y libertades fundamentales

20. Australia es consciente de la necesidad de vigilar que la legislación no restrinja sin motivo las libertades fundamentales, como la libertad de expresión. En diciembre de 2013, el Gobierno de Australia pidió a la Comisión de Reforma Legislativa de Australia que realizase un examen crítico de las leyes federales a fin de determinar las que coartaban derechos, libertades y privilegios reconocidos por el *common law* de Australia, y que evaluase si alguna estaba debidamente justificada. El examen servirá

de base para establecer si se requieren enmiendas legislativas futuras para reforzar los derechos y las libertades fundamentales en Australia. Se prevé que el informe final producto de este examen esté terminado en diciembre de 2015.

D. Instituciones

1. Comisión de Derechos Humanos de Australia (y Consejo Australiano de Organismos de Derechos Humanos) (recomendación 27)

21. La Comisión de Derechos Humanos de Australia desempeña un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos en el país. El Gobierno de Australia se identifica profundamente con los Principios de París y está decidido a aplicarlos a la Comisión, en tanto que institución nacional de derechos humanos. La Comisión reúne los criterios para ser considerada institución de derechos humanos de la categoría A². Además, cada estado y territorio de Australia cuenta con su propio órgano dedicado a promover los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la igualdad de oportunidades. Junto con la Comisión de Derechos Humanos de Australia, estos órganos constituyen el Consejo Australiano de Organismos de Derechos Humanos.

22. La Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de Australia de 1986 establece las funciones específicas de este órgano en la protección y promoción de los derechos humanos. Una de las atribuciones más importantes e innovadoras otorgadas a la Comisión es la potestad de llevar a cabo investigaciones públicas sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Australia. Existe la obligación legal de presentar ante el Parlamento los informes preparados a raíz de esas investigaciones, las cuales, por otra parte, favorecen que el Gobierno dé más importancia a los derechos humanos. Además de esas competencias de investigación, la Comisión se ocupa de las denuncias presentadas en virtud de las disposiciones legislativas de lucha contra la discriminación, y tiene la potestad de intervenir en los procesos judiciales en que se juzguen cuestiones relativas a los derechos humanos.

23. La Comisión es un órgano colegiado integrado por un Presidente y comisionados especializados en justicia social para los aborígenes y los isleños de las Islas de Torres, los niños, los derechos humanos, la discriminación por motivos de género, la discriminación por motivos de discapacidad, la discriminación por motivos de edad y la discriminación racial.

2. El Comité Parlamentario Conjunto sobre los Derechos Humanos (recomendación 17)

24. Desde 2012, toda la legislación principal y la mayor parte de la legislación secundaria que aprueba el Parlamento de Australia debe ir acompañada de una declaración de compatibilidad (como se indica en la sección titulada “Protección jurídica”) que verifique la coherencia de la legislación con las obligaciones de Australia en virtud de los siete tratados internacionales básicos de derechos humanos en los que es parte. El Comité Parlamentario Conjunto sobre los Derechos Humanos examina dicha declaración, y publica los informes en Internet.

3. Ombudsman del Commonwealth

25. El Ombudsman del Commonwealth investiga las acciones administrativas de los departamentos y organismos del Gobierno federal, tanto en respuesta a denuncias como por iniciativa propia. Las actividades del Ombudsman incluyen la supervisión de la red de centros de retención de inmigrantes de Australia, del uso que la policía hace de sus poderes y del sistema de denuncia de irregularidades con que cuenta el

sector público. Los Estados y territorios también se han dotado de defensores del pueblo.

4. Comisionado de Protección de la Vida Privada

26. El Comisionado de Protección de la Vida Privada se ocupa de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de la Intimidad de 1988 y de otras leyes relacionadas con la privacidad. Las funciones del Comisionado incluyen la tramitación de denuncias, la realización de investigaciones y otras actividades de regulación, así como la provisión de asesoramiento y orientación a personas, organizaciones y organismos sobre las obligaciones en materia de privacidad.

E. Sociedad civil

27. En toda Australia, una sociedad civil fuerte —con un sector no gubernamental dinámico e innovador— desempeña un papel fundamental en el apoyo y la prestación de servicios a los más desfavorecidos de la comunidad.

28. Como muestra de la importancia que concede el Gobierno de Australia a la función de las ONG, lleva más de 20 años organizando el Foro Anual de ONG sobre Derechos Humanos, que sirve como mecanismo de consulta sobre cuestiones relativas a los derechos humanos.

29. Los medios de comunicación independientes de Australia también desempeñan una labor importante en la promoción y protección de los derechos humanos en el país. En Australia, los medios de comunicación gozan de un alto grado de libertad de prensa, que les permite informar sobre cuestiones relativas a los derechos humanos.

F. Educación sobre los derechos humanos (recomendaciones 57 y 58)

30. El 800 aniversario de la Carta Magna (15 de junio de 2015) ha proporcionado una oportunidad única para reflexionar sobre los derechos y las libertades inherentes a ese histórico documento. Se están celebrando en todo el país una serie de actos conmemorativos para educar a los australianos acerca de la importancia de esos derechos. El 15 de junio de 2015, el Comisionado de Derechos Humanos de Australia, Tim Wilson, presentó una serie de nuevos recursos educativos de carácter interactivo que explican la importancia de la Carta Magna en su 800 aniversario. La Comisión de Derechos Humanos de Australia también ofrece muchos otros recursos educativos a los maestros (*RightsED*) adaptados al plan de estudios nacional.

G. Obligaciones internacionales

Examen de las reservas (recomendaciones 13 a 16)

31. Australia tiene una larga tradición de apoyo a los derechos humanos y de defensa del sistema de derechos humanos. Participó activamente en la elaboración del sistema internacional de derechos humanos.

32. Australia revisa periódicamente sus reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño para decidir si continúan siendo necesarias. Australia observa que sus reservas son compatibles con el objeto y el propósito de esos tratados y respetan la Convención

de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ningún Estado parte ha formulado objeciones a esas reservas.

IV. Seguimiento del examen anterior, logros y desafíos

A. Igualdad y no discriminación

1. Legislación de lucha contra la discriminación (recomendaciones 23, 42, 43 a 46, 49, 59 y 66)

33. En Australia, la igualdad y la no discriminación se protegen y promueven mediante medidas legislativas, políticas y programáticas. Australia cuenta con salvaguardias legales en materia de lucha contra la discriminación a nivel federal, estatal y territorial.

2. Multiculturalismo (recomendaciones 59 y 61 a 65)

34. Australia es una sociedad multicultural con un elevado nivel de cohesión. Más de una cuarta parte de los 23,6 millones de habitantes de Australia nacieron en el extranjero³. En el informe sobre la cohesión social (*Mapping Social Cohesion*) de la Fundación Scanlon de 2014, se señala que el 85% de la población considera que el multiculturalismo es positivo para Australia.

35. *The People of Australia* (La Población de Australia), política multicultural australiana, se complementa con una serie de programas e iniciativas para apoyar a los diversos grupos de población del país. Por ejemplo, la red de oficiales de enlace comunitario trabaja con una gran variedad de organizaciones de la comunidad de carácter étnico y cultural para establecer relaciones de colaboración y redes comunitarias, y proporcionar información a las comunidades. Además, el Gobierno sigue apoyando y consultando a órganos de asesoramiento como el Consejo Multicultural Australiano en cuestiones relativas a la cohesión de la comunidad y la armonía social.

36. Los australianos pueden elegir libremente su religión. Australia está comprometida a proteger el derecho de toda persona a expresar y practicar su religión sin injerencias u hostigamiento ni intimidación, siempre y cuando esas prácticas se ajusten a la legislación australiana.

Discriminación racial (recomendaciones 24, 25, 48, 59, 60, 62, 65, 98 y 114)

37. La Ley de Lucha contra la Discriminación Racial de 1975 prohíbe discriminar a una persona por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico. En virtud de la Ley del Código Penal del Commonwealth de 1995, es delito instigar a la violencia contra un grupo que se distinga por su raza, religión, nacionalidad, origen nacional o étnico u opiniones políticas.

38. La Alianza Nacional contra el Racismo de Australia tiene por objeto combatir el racismo en la sociedad australiana. La Comisión de Derechos Humanos de Australia lleva a cabo la campaña de concienciación pública “Racism. It stops with me” (Racismo. Yo le pongo freno) a través de recursos educativos e iniciativas de fomento de buenas prácticas y de participación comunitaria, para alentar a los australianos a adoptar medidas que combatan el racismo y para empoderar a las personas en la lucha contra el racismo dentro de la comunidad.

3. Australianos indígenas

Libre determinación y consulta (recomendaciones 24, 26, 36, 37, 102, 106, 108 a 113 y 118)

39. Australia sigue apoyando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues considera que recoge una serie de principios rectores importantes para orientar el compromiso del Gobierno con los australianos indígenas.

40. El Gobierno de Australia tiene un claro programa de reformas en materia de asuntos indígenas, que se centra en:

- Garantizar que los niños asistan a la escuela;
- Velar por la inserción laboral de los adultos;
- Asegurarse de que las comunidades sean más seguras y de que se cumple la ley; y
- Lograr el reconocimiento constitucional para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

41. La Estrategia de Promoción de los Indígenas data del 1 de julio de 2014, y su dotación presupuestaria es de 4.900 millones de dólares, que serán desembolsados a lo largo de cuatro años. La estrategia integra más de 150 proyectos individuales agrupados en cinco grandes programas temáticos para atender a los desfavorecidos y proporcionar financiación de modo estratégico a iniciativas locales. Esta financiación específica destinada a los indígenas se añade a los programas universales que prestan asistencia a los pueblos indígenas en esferas como la educación, la salud y los servicios de empleo. El 4 de marzo de 2015, el Gobierno de Australia anunció la inversión de más de 860 millones de dólares en subvenciones a unas 964 organizaciones para la prestación de servicios de primera línea centrados en el logro de las prioridades fundamentales de velar por que los niños asistan a la escuela, que los adultos tengan trabajo y que las comunidades sean seguras.

42. El establecimiento del Consejo Consultivo Indígena del Primer Ministro corrobora la prioridad que Australia asigna a las cuestiones indígenas. El Consejo asesora al Primer Ministro sobre políticas que atañen a los indígenas, y su labor se centra en los cambios prácticos destinados a mejorar las condiciones de vida de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El Consejo está integrado por australianos indígenas y no indígenas con trayectorias diversas y procedentes de lugares diferentes del país.

43. El Gobierno de Australia está apoyando la elaboración de un proyecto de empoderamiento de las comunidades liderado por los indígenas. El concepto propone una nueva interfaz entre las comunidades indígenas y el Gobierno, con miras a aumentar la responsabilidad individual y a producir mejoras sostenibles en la vida de los pueblos indígenas.

44. En el plano internacional, Australia apoyó la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y la aprobación del documento final de esta reunión en septiembre de 2014. Australia es partidaria de revisar el mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de conformidad con el documento final para, entre otros objetivos, aumentar su eficacia y eficiencia, reducir la duplicación de tareas y favorecer el intercambio de mejores prácticas en materia de políticas e ideas de programas. El Gobierno de Australia apoyó la reelección de la Sra. Megan Davis como Experta Independiente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

45. El Gobierno de Australia financia una red de proveedores de servicios en toda Australia para ayudar a los indígenas que tengan derechos de propiedad sobre la tierra a que estos les sean reconocidos y a que tomen decisiones sobre el uso que van a dar a dichos terrenos. El Gobierno también proporciona financiación a empresas indígenas que administran los títulos de propiedad de los indígenas en nombre de sus titulares.

46. El Gobierno de Australia está examinando las conclusiones de varios estudios recientes sobre posibles maneras de apoyar a las empresas de títulos de propiedad de los indígenas para conseguir que estos utilicen sus propiedades para alcanzar un mayor grado de independencia gracias al desarrollo económico y social sostenible.

47. El Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia es una empresa independiente cuya propiedad y gestión recae en sus miembros y directores. A 18 de febrero de 2015, el Congreso Nacional contaba entre sus miembros con 8.241 particulares y 181 organizaciones⁴. Desde 2009-2010, el Gobierno australiano ha aportado 29,3 millones al Congreso Nacional para apoyar su establecimiento y sus operaciones.

48. El Gobierno de Australia colabora con numerosos dirigentes, organizaciones y comunidades indígenas a la hora de diseñar las políticas y los programas, y prestar servicios que afectan a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Salud, vivienda, empleo y educación (recomendaciones 49, 101 y 114 a 119)

49. La asistencia de los niños a la escuela es la prioridad número uno del Gobierno de Australia en lo que a asuntos indígenas se refiere. Es fundamental que los niños de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres reciban una educación, lo cual les brindará más oportunidades en el futuro. El 2 de mayo de 2014, los gobiernos federal, estatales y territoriales acordaron fijar un nuevo objetivo de frecuentación escolar, y dispusieron que los resultados serían de dominio público. El nuevo objetivo busca eliminar las diferencias en asistencia a la escuela entre los niños australianos indígenas y los no indígenas en un plazo de cinco años, a más tardar en 2018.

50. El Gobierno de Australia ha adoptado medidas para lograr ese objetivo, como la aplicación de la Estrategia de Asistencia a la Escuela en Lugares Remotos, y la ampliación del Plan de Mejoramiento de la Inscripción y Asistencia Escolares por Medio de la Reforma del Sistema de Protección Social y de las becas disponibles para los estudiantes indígenas. La nueva Estrategia de Promoción de los Indígenas del Gobierno de Australia se centra también en proyectos destinados a aumentar la frecuentación escolar y los buenos resultados académicos.

51. Otra prioridad es lograr que las personas aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres consigan empleo. La Estrategia de Promoción de los Indígenas – Programa de Empleo, Tierra y Economía tiene por objeto ayudar a los adultos indígenas a conseguir empleo, desarrollar actividades empresariales indígenas viables y utilizar sus títulos de propiedad para generar beneficios económicos y sociales.

52. En el marco del programa, el Gobierno de Australia también se ha comprometido a aportar hasta 45 millones de dólares para establecer centros de capacitación, formación profesional y empleo en todo el país, en los que se preparará a 5.000 solicitantes de empleo indígenas y se les proporcionará empleo garantizado a más tardar en diciembre de 2015.

53. El Gobierno de Australia está invirtiendo 3.300 millones de dólares a lo largo de cuatro años por conducto del Programa de Salud para los Australianos Indígenas. Se inscriben en esta iniciativa la ampliación de programas eficaces, incluidos los centrados en la salud infantil y materna, y en la prevención y gestión de las enfermedades crónicas.

54. El Gobierno de Australia está negociando con Nueva Gales del Sur, Australia Occidental, Australia Meridional, Queensland y el Territorio del Norte una nueva Estrategia de Vivienda para los Indígenas de Zonas Remotas, que sustituiría a la Alianza Nacional sobre la Vivienda Indígena. El Gobierno prevé destinar 1.130 millones de dólares a lo largo de tres años a vivienda en zonas remotas. La estrategia tiene por objeto aumentar la sostenibilidad de la vivienda en zonas remotas vinculando los pagos a los resultados en materia de gestión de la vivienda en propiedad y en alquiler, el empleo de indígenas en la entrega de viviendas, y la propiedad de la vivienda y la tenencia de la tierra. El Gobierno seguirá también trabajando en el problema del hacinamiento en las comunidades indígenas remotas financiando la construcción de nuevas viviendas y la renovación de las viviendas existentes en las comunidades indígenas apartadas.

Seguridad en la comunidad y sistema judicial (recomendaciones 90 y 93 a 95)

55. En Australia, el sistema de justicia penal —incluida la policía, los tribunales y los centros penitenciarios— son competencias de las administraciones estatales y territoriales. El Gobierno de Australia financia proyectos dirigidos a mitigar los factores que afectan negativamente a la seguridad en las comunidades, como la baja frecuentación escolar y el desempleo.

56. El Gobierno de Australia concede prioridad a las intervenciones que tendrán un efecto inmediato sobre la seguridad de la comunidad, entre ellas: establecer infraestructura policial que permita una presencia permanente de las fuerzas del orden en algunas comunidades indígenas remotas, continuar apoyando al Gobierno del Territorio del Norte mediante una contribución financiera al programa Participación de la Policía en Actividades de la Comunidad y seguir ayudando al Grupo de Tareas de Lucha contra el Maltrato de Niños del Territorio del Norte.

57. El Gobierno continuará apostando por una normativa estricta en materia de bebidas alcohólicas en todo el país, y apoyando los esfuerzos de las comunidades indígenas para combatir la violencia asociada al alcohol, de modo que todos los miembros de la comunidad, en particular las mujeres, los niños y las personas de edad, puedan vivir en paz y seguridad.

58. En la actualidad, los australianos indígenas tienen 15 veces más probabilidades de ser encarcelados que los australianos no indígenas. El Gobierno de Australia considera que puede lograrse una reducción de la tasa de encarcelamiento de las personas indígenas centrandose los esfuerzos en los factores desencadenantes de la violencia a largo plazo y financiando proyectos de intervención temprana y prevención de la reincidencia dirigidos a los individuos que corren mayor riesgo de delinquir.

4. Género

Igualdad entre los géneros (recomendaciones 49, 51, 53 a 56, 99 y 120)

59. La Oficina de la Mujer del Gobierno de Australia realiza una labor transversal en el seno del Gobierno para promover cuatro prioridades en la formulación de políticas sobre la mujer: el empoderamiento económico de la mujer, el liderazgo, la seguridad y la participación internacional.

60. El aumento de la igualdad entre los géneros en el lugar de trabajo y de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo contribuyen al empoderamiento económico de la mujer y a la seguridad a lo largo de su vida. El Gobierno está decidido a lograr una mayor igualdad entre los géneros en el lugar de trabajo. Recurre para ello a organismos y legislación que promueven la igualdad, por ejemplo, el Organismo para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo, la Comisión de Derechos Humanos de Australia, la Ley contra la Discriminación Sexual de 1984, la

Ley de Relaciones Laborales Justas de 2009 y la Ley de la Igualdad entre los Géneros en el Lugar de Trabajo de 2012.

61. Conscientes de la necesidad de aumentar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, en mayo de 2015, el Gobierno de Australia anunció una partida para la familia de 4.400 millones de dólares, destinada a ofrecer más opciones a los padres —entre ellas la de trabajar— y a prestar un apoyo más completo a las familias y los niños necesitados. La nueva Ayuda para el Cuidado Infantil reemplazará el marasmo de subvenciones y programas que existían previamente. El subsidio irá dirigido a padres con ingresos bajos y medios, y oscilará entre el 85% para las familias de ingresos bajos y el 50% para las familias que ganen unos 170.000 dólares o más, con un tope de tarifa horaria. Durante dos años, se probará también un programa de niñeras para las familias que tengan más dificultades en acceder a los servicios de cuidado infantil ordinarios.

62. El Gobierno de Australia lideró el compromiso de los países del G20 de reducir la brecha de género existente en la participación en la fuerza de trabajo en un 25% para 2025. Para Australia, esto supone una reducción de la disparidad entre los géneros de tres puntos porcentuales, lo que —según las actuales previsiones de empleo— podría significar el ingreso en la fuerza de trabajo de más de 200.000 mujeres.

63. La capacitación empresarial de las mujeres se verá positivamente afectada por el compromiso adquirido por el Gobierno de Australia de dedicar 5.000 millones de dólares a un Paquete de Medidas para la Pequeña Empresa y el Empleo, cuyo objetivo es apoyar a las compañías de dimensiones reducidas. En Australia, un tercio de los propietarios de empresas son mujeres, que además crean más del 50% de las pequeñas empresas nuevas del país.

64. El Gobierno de Australia sigue trabajando para alcanzar el objetivo de diversidad de género en las juntas de dirección gubernamentales, que se ha fijado en el 40% y actualmente se sitúa en el 39,7%. El Gobierno apoya el programa *BoardLinks*, que selecciona a mujeres cuyo perfil se adecúa a estos puestos.

65. El Gobierno de Australia también está colaborando con miembros del mundo empresarial y del ámbito comunitario para apoyar el aumento del número de mujeres en cargos directivos y puestos de mando. El Gobierno colabora con el Instituto Australiano de Directores de Empresas en el exitoso Programa de Becas para Ampliar la Diversidad de la Juntas de Dirección, con el objetivo de aumentar el número de mujeres en las juntas de dirección de organizaciones privadas y no gubernamentales.

66. El Gobierno de Australia invirtió 150.000 dólares en un proyecto de la Comisión de Derechos Humanos de Australia destinado a desarrollar los recursos de que disponen los empleadores para apoyar a los padres trabajadores durante el embarazo, la licencia parental y la reincorporación al trabajo. En septiembre de 2014, el Organismo para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo puso en marcha una campaña nacional de equidad en la remuneración para crear conciencia sobre esa cuestión y apoyar a los empleadores para que evalúen y monitoreen el grado de igualdad en la remuneración dentro de sus organizaciones. Cada seis meses, la Oficina de Estadística de Australia proporciona datos sobre la equidad en la remuneración, que se publican y analizan periódicamente.

67. La Embajadora de Australia para las Mujeres y las Niñas, la Sra. Natasha Stott Despoja, vela por que la igualdad entre los géneros sea un elemento central de la política exterior de Australia y de su programa de ayuda. La Embajadora promueve internacionalmente la participación igualitaria de la mujer en la vida política, económica y social. Con una orientación geográfica centrada en la región indopacífica, la Sra. Stott Despoja colabora con gobiernos, foros regionales y multilaterales, y asociados para el desarrollo y de la sociedad civil para promover el

acceso de la mujer a puestos directivos y de toma de decisiones, su empoderamiento económico y el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas. Otras prioridades son la protección de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto, el papel de estas en la prevención y la solución de conflictos y la consolidación de la paz, la lucha contra la trata de mujeres y niñas, y la mejora de la educación y la salud.

68. En la sección sobre la “violencia en el hogar”, se proporciona información sobre el Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos 2010-2022 y sobre medidas de otra índole para dar respuesta a este problema prioritario para el Gobierno.

Discriminación por motivos de sexo (recomendaciones 51 y 52)

69. La legislación contra la discriminación del Gobierno federal y de los gobiernos estatales y territoriales evidencia el compromiso de Australia con la igualdad de derechos de la mujer. La Ley contra la Discriminación Sexual de 1984 prohíbe el acoso sexual y establece que es ilegal discriminar por motivos de sexo, estado civil o situación sentimental, responsabilidades familiares, lactancia materna y embarazo o posibilidad de embarazo en una serie de ámbitos de la vida pública. La Ley también prevé medidas especiales destinadas a lograr una igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, así como los demás motivos protegidos por la Ley.

5. Orientación sexual, identidad de género y personas intersexuales

No discriminación (recomendaciones 51, 66 a 68)

70. El Gobierno de Australia considera que todas las personas tienen derecho al respeto, la dignidad y la protección jurídica con independencia de su orientación sexual, su identidad de género o su condición de personas intersexuales. En 2013, se enmendó la Ley contra la Discriminación Sexual de 1984 para proteger de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y condición de personas intersexuales. Australia es uno de los primeros Estados en proporcionar protección específica contra la discriminación a las personas intersexuales.

71. En 2013, el Gobierno de Australia presentó las Directrices sobre el Reconocimiento del Sexo y el Género, que normalizan las pruebas necesarias para que una persona pueda establecer o cambiar su sexo o género en los documentos oficiales de los departamentos y organismos del Gobierno de Australia. No es necesario que la persona se haya sometido a cirugía de reasignación de sexo ni a terapias hormonales.

72. En marzo de 2014, el Territorio de la Capital de Australia aprobó una ley por la que se eliminó el requisito de que las personas de sexo/género diverso deban someterse a cirugía de reasignación sexual antes de que puedan cambiar su sexo en sus partidas de nacimiento. La aprobación de esa ley coincidió con otros cambios en la política del Gobierno del Territorio de la Capital de Australia, como el reconocimiento legal de la diversidad sexual y de género al permitir que las personas se identifiquen como una tercera categoría —indeterminado/intersexual/no especificado— en su certificado de nacimiento.

Relaciones entre personas del mismo sexo

73. Desde el último examen de Australia, Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia Meridional han promulgado legislación para despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, y otras jurisdicciones están avanzando en la misma dirección.

6. Personas con discapacidad (recomendaciones 40, 41, 46 y 49)

74. El programa de reformas en materia de discapacidad del Gobierno de Australia está generando cambios fundamentales en nuestra sociedad en lo que respecta a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. El Gobierno de Australia trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y territoriales para lograr ese objetivo mediante la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad y el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad. La Ley contra la Discriminación por Discapacidad de 1992 prevé importantes medidas de protección contra la discriminación de las personas con discapacidad a nivel federal. Todos los estados y territorios cuentan también con legislación que ofrece reparación en caso de discriminación por motivos de discapacidad.

75. La Estrategia Nacional sobre la Discapacidad para 2010-2020, aprobada por las administraciones australianas en 2011, proporciona un marco nacional de políticas para mejorar las condiciones de vida de los australianos con discapacidad. La estrategia tiene por objeto impulsar un enfoque más incluyente en el diseño de políticas, programas e infraestructura, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en todos los ámbitos de la vida australiana. Mejorar el acceso a los edificios, el transporte, los actos sociales, la educación, los servicios de atención de la salud y el empleo contribuirá a asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollar su potencial como ciudadanos en pie de igualdad. Preparando el Terreno 2011-2014 es la primera fase de aplicación de la estrategia, y su objetivo es llevar a cabo una reforma de la planificación y la prestación de servicios tanto generales como específicamente orientados a las personas con discapacidad en los ámbitos de mayor prioridad. En las fases segunda y tercera del plan de aplicación, además de continuar trabajando para lograr los objetivos actuales, se incorporarán nuevas ideas para optimizar los servicios que reciben las personas con discapacidad y mejorar su situación. La estrategia prevé la presentación de informes al Consejo de Gobiernos Australianos cada dos años, en los que se hará un seguimiento de los resultados a nivel nacional en las principales esferas de trabajo.

76. El compromiso de Australia con las personas con discapacidad también queda de manifiesto en su reforma insignia, el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, que proporciona apoyo de por vida a las personas con discapacidad y a sus cuidadores.

77. Este Plan comenzó a aplicarse en cuatro lugares de Australia el 1 de julio de 2013, y el 1 de julio de 2014 se sumaron otros tres emplazamientos. Para julio de 2019, el Plan estará implantado en todos los estados y territorios, con excepción de Australia Occidental⁵.

78. Una vez esté plenamente operativo, el Plan beneficiará a más de 460.000 personas con discapacidades importantes y permanentes, y les permitirá poder elegir y controlar el apoyo que necesitan para alcanzar sus metas, objetivos y aspiraciones en materia de participación social y económica.

79. En mayo de 2015, el Gobierno de Australia anunció que a lo largo de cuatro años iba a desembolsar una partida de 25 millones de dólares destinada a acometer una reforma del modelo de empleo de las personas con discapacidad, que debía completarse en 2018. El paquete de medidas incluye la creación del portal *JobAccess Gateway*, un nuevo centro de servicios digital para poner en contacto a las personas con discapacidad y los empleadores, que se verá complementado por una serie de medidas de apoyo en el lugar de trabajo diseñadas para ayudar a las personas con discapacidad a adquirir las competencias necesarias y a encontrar y conservar un puesto de trabajo. Como parte de la Estrategia de Empleo para los Jóvenes, que es más amplia, el Gobierno probará a nivel nacional dos modelos especializados de apoyo al

empleo, destinados a ayudar a los jóvenes desfavorecidos con enfermedades mentales a conseguir un empleo y conservarlo.

Interacción con el sistema de justicia penal

80. La Constitución de Australia dispone que los centros penitenciarios y las instituciones de salud mental son competencia de los gobiernos estatales y territoriales. Los estados y territorios australianos han adoptado medidas para facilitar la interacción con el sistema de justicia penal de las personas con discapacidad que tienen necesidades complejas o un elevado grado de vulnerabilidad. Entre ellas figuran el acceso a vías alternativas, el asesoramiento y los servicios de acompañamiento para personas con problemas de salud mental, y la capacitación de los investigadores sobre cómo entrevistar a testigos vulnerables.

81. La cuestión de las enfermedades mentales y las discapacidades cognitivas en el sistema de justicia penal es un ámbito que se evalúa y reforma periódicamente. Se han efectuado varios exámenes a nivel estatal y federal, incluido el reciente estudio titulado "Igualdad, capacidad y discapacidad en la legislación del Commonwealth", de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia.

Esterilización (recomendación 39)

82. En 2013, un comité del Senado australiano realizó una investigación sobre la esterilización forzada o involuntaria de las personas con discapacidad y las personas intersexuales. La investigación formuló una serie de recomendaciones, en particular en los ámbitos de la educación, la representación y la asistencia legal, la uniformización de la legislación y el tratamiento médico. El comité del Senado llegó a la conclusión de que una prohibición total de los procedimientos de esterilización no terapéutica podría suponer una conculcación del derecho de las personas con discapacidad a acceder a todos los recursos de apoyo médico en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. En la respuesta del Gobierno de Australia al informe del comité se reconoce que la mayoría de las recomendaciones de ese documento hacen referencia a cuestiones de carácter estatal y territorial. Por lo tanto, el Gobierno colaborará con los estados y los territorios en esos asuntos, según proceda.

7. Niños (recomendación 46)

83. Australia concede gran importancia a mejorar la seguridad y el bienestar de los niños. El país está aplicando el primer Marco Nacional de Protección de los Niños Australianos para 2009-2020 a través de una serie de planes de acción trienales. El Marco Nacional presenta un enfoque integral y de largo plazo para evitar que los niños sufran malos tratos o desatención, y mejorar su seguridad y bienestar. Se prioriza la prevención, la intervención temprana y la atención de las familias y los niños que tengan un historial de malos tratos o desatención. Entre los logros concretos del primer plan de acción figuran:

- La elaboración de un Plan Nacional de Apoyo a los Niños Indígenas, que prevé que en todos los proyectos prioritarios nacionales que se desarrollen en el futuro dentro del Marco Nacional, mientras este esté en vigor, se preste una atención especial a los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y
- La finalización del primer estudio nacional sobre la respuesta de Australia a los comportamientos sexualizados o sexualmente abusivos en los niños y jóvenes.

84. En el segundo plan de acción (2012-2015) se esboza el tipo de actuaciones que los gobiernos, el sector no gubernamental y la comunidad en general llevarán a cabo en el siguiente trienio del Marco Nacional.

85. La Ley de la Familia de 1975 vela por que se respete el interés superior de los niños, protegiéndolos contra daños físicos o psicológicos causados por abusos, desatención o violencia en el hogar. Los tribunales deben tener en cuenta el interés superior del niño a la hora de tomar decisiones sobre su crianza. Con las enmiendas de 2012 a la Ley de la Familia, los niños han pasado a ocupar el lugar central en las cuestiones de derecho de familia y se ha dado prioridad a su seguridad.

86. En enero de 2013, el Gobierno de Australia anunció la creación de una Comisión Real de Investigación de las Respuestas Institucionales al Abuso Sexual de Niños, que está examinando la manera en que las instituciones y los gobiernos pueden brindar una mejor protección a los niños, optimizar sus prácticas en materia de presentación de informes y de respuesta ante los incidentes, y abordar los efectos del abuso sexual de niños. Se prevé que el informe final de este examen se complete a más tardar en diciembre de 2017. El Gobierno de Australia financia una serie de servicios que proporcionan apoyo a los grupos afectados.

87. Consciente de que los beneficios de una enseñanza de calidad en la primera infancia son especialmente importantes para los niños procedentes de medios desfavorecidos, en mayo de 2015, el Gobierno de Australia anunció un plan para facilitar el acceso de los niños desfavorecidos y vulnerables a los servicios de la primera infancia a través del Programa de Protección Social para el Acceso a Servicios de Guardería (*Child Care Safety Net*). El programa incluye la concesión de ayudas adicionales para sufragar el costo de la matrícula para los niños y las familias desfavorecidos y un programa competitivo de subvenciones para reducir los obstáculos en el acceso a ese tipo de servicios. En el marco del programa, los centros recibirán más fondos para dotarse del material y el personal necesarios para apoyar a los niños con discapacidad y los niños de orígenes culturales y lingüísticos diferentes.

Comisionada Nacional para la Infancia (recomendaciones 28 y 29)

88. El 25 de marzo de 2013 se nombró a la primera Comisionada Nacional para la Infancia de Australia, la Sra. Megan Mitchell, por un período de cinco años. Este nombramiento constituye un paso importante en la protección de los niños en Australia. El mandato de la Sra. Mitchell se centra en los derechos y los intereses de los niños, y en las leyes, las políticas y los programas que los afectan, en particular a los niños vulnerables.

8. Discriminación por motivos de edad (recomendaciones 43, 44, 49 y 142)

89. El Gobierno de Australia está decidido a promover y proteger los derechos de las personas de edad y, a tal efecto, colabora en la labor que lleva a cabo el Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento.

90. El 30 de julio de 2011, la Honorable Sra. Susan Ryan (Oficial de la Orden de Australia) fue nombrada primera Comisionada Encargada de la Lucha contra la Discriminación por Edad, por un período de cinco años. La Sra. Ryan se encarga de promover la toma de conciencia sobre la discriminación por motivos de edad, y de supervisar e impulsar la eliminación de la discriminación por motivos de edad en todas las esferas de la vida pública. Asimismo, en su calidad de Comisionada Encargada de la Lucha contra la Discriminación por Edad y por Discapacidad, se encargará de dirigir la investigación que, como se ha mencionado anteriormente, la Comisión de Derechos Humanos de Australia ha de llevar a cabo sobre las prácticas, actitudes y leyes federales que afectan a la participación igualitaria en el empleo de los australianos de edad y las personas con discapacidad.

91. La Ley de Lucha contra la Discriminación por Edad de Australia (2004) prohíbe la discriminación por motivos de edad en esferas de la vida pública como la vivienda,

la educación y el empleo. Los estados y los territorios de Australia también tienen sus propias leyes en materia de discriminación, que prohíben la discriminación por motivos de edad. Entre otras disposiciones legislativas nacionales que contribuyen a la protección de las personas de edad figuran:

- La Ley de Seguridad Social de 1991, que proporciona protección social para los ingresos de las personas en edad de jubilación, y
- La Ley de Atención de las Personas de Edad de 1997, que facilita el acceso a los servicios de atención dirigidos a las personas de edad de quien los necesite, independientemente de su raza, cultura, idioma, género, circunstancias económicas o ubicación geográfica.

B. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

1. Prevención de la tortura

Uso de la fuerza por la policía (recomendaciones 88 y 89)

92. Australia limita el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía. En la Ley de Delitos del Commonwealth de 1914 se especifica que la policía debe únicamente hacer uso de la fuerza en un grado razonable cuando sea preciso para dar cumplimiento a una orden judicial o proceder a una detención. Los policías reciben una amplia formación y cuentan con un alto nivel de apoyo institucional en lo que respecta al ejercicio de sus potestades, para que estas se utilicen eficazmente y sin poner en peligro ni al agente ni a la población.

93. El principio rector que se aplica en Australia es que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, proporcional al nivel de riesgo que exista y de la mínima intensidad posible para que la función policial pueda llevarse a cabo con seguridad y de manera efectiva.

94. Las denuncias presentadas contra la Policía Federal de Australia se investigan exhaustivamente, bajo la debida supervisión del Ombudsman del Commonwealth y el Comisionado para la Integridad de la Fuerzas de Seguridad. En los estados y territorios de Australia se han adoptado disposiciones similares.

Trato humano de los reclusos (recomendaciones 71 y 91)

95. La prestación de servicios correccionales por parte de los estados y territorios de Australia se ajusta a las Directrices para los Establecimientos Penitenciarios de Australia, que recogen una serie de principios uniformes utilizados por los estados y los territorios en la elaboración de sus propias normas, políticas y criterios de evaluación en el ámbito de las prácticas correccionales. Las Directrices están en consonancia con las normas aceptadas internacionalmente en la materia, incluidas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y reconocen y toman en consideración las particulares circunstancias comunitarias, culturales y lingüísticas de los reclusos indígenas.

96. En Australia, todos los fallecimientos que tienen lugar cuando una persona se encuentra privada de libertad son sometidos a una investigación forense. Los estados y territorios de Australia han adoptado políticas para velar por que el fallecimiento de una persona que se encuentre en situación de privación de libertad se gestione con integridad y respeto, y que se cumplan todos los requisitos legales, religiosos, culturales y espirituales. En 1992, el Instituto Australiano de Criminología estableció el Programa Nacional de Registro de Muertes en Reclusión, que desde su creación ha venido examinando el alcance y la naturaleza de todos los fallecimientos ocurridos hasta la fecha en las prisiones y los correccionales de menores, y durante la custodia

policial. También se han recabado datos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1980. Todos los informes elaborados en el marco del programa están a disposición del público.

Extradición (recomendación 34)

97. El régimen de extradición de Australia se rige por lo dispuesto en la Ley de Extradición de 1988. Al pronunciarse sobre la extradición de una persona, el Fiscal General debe denegarla cuando el delito pueda ser castigado con la pena de muerte, excepto si existen garantías de que no se impondrá dicha pena o si, de imponerse, no se aplicará. Cuando una persona opte por renunciar a esta protección frente a la extradición, el Fiscal General ha de contar con garantías suficientes de que a su regreso al país solicitante, no existirá ningún riesgo real de aplicación de la pena de muerte al reo por cualquier delito.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (recomendaciones 1 a 6)

98. El Gobierno australiano está considerando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y, por consiguiente, su entrada en vigor en Australia. Los lugares de detención de Australia son actualmente objeto de inspecciones independientes llevadas a cabo por una serie de órganos de los gobiernos federal, estatales y territoriales, entre ellos el Ombudsman del Commonwealth, los defensores del pueblo estatales y territoriales y la Comisión de Derechos Humanos de Australia. Si el Gobierno de Australia decide proceder a la ratificación, determinará qué órganos nacionales son los adecuados para llevar a cabo la función de inspección como parte del Mecanismo Nacional de Prevención.

2. Violencia en el hogar (recomendaciones 47, 72 a 74 y 76 a 82)

99. El Gobierno de Australia considera fundamental que las mujeres y sus familias estén a salvo de la violencia en sus hogares y comunidades. Todas las administraciones de Australia están aplicando actualmente el Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos 2010-2022 y velan por que sus programas sean efectivos y cuenten con los recursos necesarios. Este plan de 12 años, que cuenta con la colaboración de los gobiernos estatales y territoriales, tiene por objeto lograr una reducción significativa y sostenida de la violencia contra las mujeres y los niños gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad.

100. El primer plan de acción (2010-2013) sentó las bases para el plan nacional y sirvió para establecer las infraestructuras nacionales esenciales. Estas intervenciones incluyeron la creación en Australia de la Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer y la Reducción de la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos y la organización de prevención primaria Our Watch (Nuestro Observatorio), que tiene por objeto cambiar las actitudes culturales hacia la violencia y promover unas relaciones fundadas en el respeto.

101. El Primer Ministro inauguró el Segundo Plan de Acción del Plan Nacional el 27 de junio de 2014 en Sídney. Este segundo plan contiene 26 medidas prácticas que todos los gobiernos australianos concordaron en calificar como fundamentales para mejorar la seguridad de las mujeres. El Gobierno de Australia ha dedicado más de 100 millones de dólares a este segundo plan de acción. En la página web <http://www.dss.gov.au/nationalplan> puede obtenerse más información sobre el Plan Nacional, incluido el Segundo Plan de Acción.

102. Una prioridad fundamental del Segundo Plan de Acción es comprender las diversas experiencias de la violencia, en particular entre los grupos de alto riesgo

como las aborígenes y las isleñas del Estrecho de Torres, las mujeres de entornos culturales y lingüísticos diversos y las mujeres con discapacidad.

103. El Gobierno de Australia está invirtiendo 230 millones de dólares para prorrogar el Acuerdo de Asociación Nacional sobre las Personas sin Hogar hasta 2017, y concede prioridad a la financiación de los servicios de primera necesidad para las mujeres y los niños víctimas de violencia en el hogar y la familia. Además de ese acuerdo, el Gobierno de Australia aporta cada año a los estados unos 1.300 millones de dólares para programas de vivienda, de los que 250 deberían teóricamente destinarse a servicios para las personas sin hogar.

104. 1800RESPECT proporciona servicios de apoyo a las víctimas de la violencia en el hogar a través del teléfono y de Internet. El Gobierno de Australia ha anunciado una contribución adicional de cuatro millones de dólares para ayudar a 1800RESPECT a atender el aumento de la demanda. Así, el presupuesto trienal de 1800RESPECT hasta el 30 de junio de 2017 asciende a 33,5 millones de dólares.

105. El Primer Ministro ha manifestado claramente que la reducción de la violencia contra la mujer es una prioridad nacional, y ha elevado la cuestión al Consejo de Gobiernos Australianos. En abril de 2015, este órgano acordó la adopción urgente de medidas colectivas para hacer frente a la violencia contra la mujer. Antes del fin de 2015:

- Se llegará a un acuerdo sobre un sistema nacional de órdenes de protección contra la violencia doméstica, que todos los estados y territorios de Australia estarán obligados a reconocer y aplicar;
- Se informará sobre los avances en la creación de un sistema nacional de información que permita a los tribunales y a la policía de los distintos estados y territorios intercambiar información sobre órdenes activas;
- Se estudiará la posibilidad de llevar a cabo una uniformización jurídica en la materia, para que los autores de actos de violencia contra la mujer se enfrenten a las mismas consecuencias legales en toda Australia; y
- Se examinarán estrategias para hacer frente a los usos de la tecnología que contribuyen al maltrato de las mujeres, y para que las mujeres dispongan de una protección jurídica adecuada contra ello.

106. El Consejo de Gobiernos Australianos ha creado también el Comité Consultivo sobre la Reducción de la Violencia contra la Mujer, para asesorar al Consejo sobre modos de reducir la violencia. El Comité Consultivo está presidido por el ex-Jefe de la Policía de Victoria, el Sr. Ken Lay (galardonado con la Medalla al Mérito Policial). Ocupan la vicepresidencia la Sra. Rosie Batty, activista de la lucha contra la violencia en el hogar nombrada “Australiana del Año” en 2015, y la Sra. Heather Nancarrow, de la Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer.

107. En colaboración con los estados y territorios, el Gobierno de Australia llevará a cabo una campaña nacional cofinanciada de 30 millones de dólares para reducir la violencia contra la mujer.

3. Trata de personas, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud (recomendaciones 83 a 87 y 134)

108. El Gobierno de Australia sigue aplicando un sólido programa de iniciativas para combatir la trata de seres humanos. En diciembre de 2014, Australia hizo público el Plan Nacional de Acción para Luchar contra la Trata de Personas y la Esclavitud 2015-2019, en el que se establecen los objetivos estratégicos de la respuesta global de Australia a la trata de seres humanos para los próximos cinco años.

109. Australia sigue combatiendo las nuevas formas de la trata de personas y la explotación conexas. En 2014, el Gobierno australiano estableció un Grupo de Trabajo sobre las Cadenas de Suministro, al que se encargó examinar qué estrategias utilizar para abordar el problema de la explotación laboral en las cadenas de suministro de bienes y servicios, incluidas la trata de personas y la esclavitud. El Grupo de Trabajo está integrado por representantes de los gobiernos, las empresas, la industria, los sindicatos y la sociedad civil. En diciembre de 2014, el Gobierno de Australia puso en marcha un Paquete de Medidas contra el Matrimonio Forzado. Se elaboró en colaboración con la sociedad civil y su objetivo era proporcionar información y recursos sobre el matrimonio forzado, entre ellos folletos informativos y un protocolo de seguridad para las personas que habían sido obligadas a contraer matrimonio o que corrían el riesgo de serlo. Australia también contribuye al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para Luchar contra las Formas Contemporáneas de la Esclavitud.

110. Australia modificó su legislación sobre la trata de personas en 2013 para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley puedan investigar y enjuiciar todas las formas de trata de personas, entre ellas la explotación sexual y laboral, y para reforzar su compromiso con la persecución penal de los autores de delitos de trata.

111. El Gobierno de Australia sigue apoyando el fortalecimiento de las iniciativas regionales en materia de migración irregular y lucha contra la trata de personas, por ejemplo a través del Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos. Junto con Tailandia, Australia lideró en 2013-2014 la elaboración de una Guía de Políticas para la Tipificación del Delito de Trata de Personas, en el marco del Proceso de Bali. En 2014-2015, Australia fue uno de los principales miembros de un comité de redacción que, dentro del Proceso de Bali, elaboró guías para la elaboración de políticas sobre la identificación y protección de las víctimas de la trata de seres humanos. Australia también copreside, junto con Indonesia, el recién establecido Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas, en el marco del Proceso de Bali. La iniciativa más emblemática de Australia, el Programa Australia-Asia de Lucha contra la Trata de Personas 2013-2018, cuenta con una dotación financiera de 50 millones de dólares. El programa da continuidad a los esfuerzos llevados a cabo por Australia durante los últimos diez años para reforzar las respuestas de la justicia penal a la trata de personas en Asia Sudoriental, tanto en el plano nacional como en el regional.

4. Medidas de lucha contra el terrorismo (recomendaciones 136 a 141)

112. El Gobierno de Australia ha revisado exhaustivamente la legislación en materia de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, incluidos un examen de las leyes fundamentales de lucha contra el terrorismo que existen en Australia —llevado a cabo por los gobiernos del país— y cuatro informes anuales elaborados por el antiguo Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional. A la vista de esos exámenes, y como respuesta al nuevo reto que presenta el regreso al país de combatientes extranjeros, Australia ha promulgado nuevas disposiciones legislativas en materia de terrorismo y seguridad nacional. Como ocurre con toda la legislación federal, el Comité Parlamentario Conjunto sobre los Derechos Humanos sometió estas nuevas disposiciones a una evaluación de compatibilidad con las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos. Además, la legislación fue examinada pormenorizadamente por el Comité Parlamentario Conjunto sobre Inteligencia y Seguridad, que formuló varias recomendaciones de mejora. Todas ellas fueron aceptadas por el Gobierno antes de su aprobación.

C. Justicia y estado de derecho (recomendación 92)

113. Para ayudar a las personas desfavorecidas con sus problemas judiciales, los gobiernos australianos financian una serie de servicios de asistencia jurídica, como las comisiones de asistencia jurídica, los centros jurídicos comunitarios y los servicios jurídicos para indígenas. El Gobierno de Australia da prioridad a la financiación de servicios jurídicos de primera necesidad.

114. El Gobierno de Australia invertirá 1.300 millones de dólares a lo largo de cinco años en el Acuerdo Nacional de Asociación sobre Servicios de Asistencia Jurídica, que mejorará la planificación, la coordinación y la prestación de servicios a nivel local para los australianos desfavorecidos en ámbitos como el derecho de familia.

115. El Gobierno de Australia seguirá financiando directamente a los proveedores de asistencia jurídica destinada a los indígenas, en consonancia con las prioridades del Gobierno en materia de cuestiones indígenas y con su compromiso continuo de mejorar la situación de los australianos indígenas en lo que respecta a la legislación y la justicia. El Gobierno invertirá 358 millones de dólares a lo largo de cinco años en servicios de asistencia jurídica dirigidos a los indígenas australianos.

D. Seguridad social (recomendaciones 32, 33, 50 y 142)

116. Australia ha desarrollado un sistema integral de seguridad social para ayudar a quienes lo necesitan. Varias disposiciones legislativas federales regulan los subsidios y otras prestaciones que el sistema de seguridad social pone a disposición de los ciudadanos. En virtud de esta legislación, el Gobierno de Australia proporciona una serie de subsidios y servicios a los australianos, incluidos los jubilados, los desempleados, las familias, los cuidadores, los padres, las personas con discapacidad, los estudiantes y los pueblos indígenas.

E. Derecho a una vivienda adecuada

117. En la actualidad, el Gobierno de Australia destina alrededor de 6.500 millones de dólares anuales a ayuda para la vivienda y a servicios de asistencia a las personas sin hogar.

118. El Acuerdo Nacional sobre Vivienda Asequible proporciona a los gobiernos federal, estatales y territoriales un marco para trabajar conjuntamente en la mejora de la asequibilidad de la vivienda y la situación de las personas sin hogar en Australia. En el contexto del Acuerdo, el Gobierno de Australia aporta cada año 1.300 millones de dólares a los gobiernos estatales y territoriales para ese fin.

119. El Programa de Ayudas para Alquileres del Commonwealth mejora la asequibilidad de la vivienda de alquiler para alrededor de 1.300.000 personas y familias con niños. El Programa desempeña un papel fundamental en la reducción de los costos de los alquileres residenciales privados y de la presión financiera que este gasto implica para las personas que reciben subsidios para complementar sus ingresos o pagos en el marco de los beneficios fiscales concedidos a las familias (parte A) que, en 2014-2015, ascendieron a 4.200 millones de dólares.

120. El Programa Nacional de Asequibilidad de los Alquileres promueve la inversión en viviendas de alquiler asequibles. El Programa, que comenzó en 2008, tiene por objeto proporcionar viviendas a las familias de ingresos bajos y moderados a un precio al menos 20% por debajo de los alquileres corrientes. A 30 de abril de 2015,

aproximadamente 38.000 viviendas habían recibido aprobación para ser incluidas en el Programa, pero solo unas 26.500 estaban alquiladas o disponibles para el alquiler.

121. Los gobiernos australianos siguen trabajando para reducir el número de personas sin hogar a través del Acuerdo de Asociación Nacional sobre las Personas sin Hogar, que presta apoyo a más de 300 iniciativas para personas sin hogar en toda Australia. En los próximos dos años (desde julio de 2015), el Gobierno de Australia destinará 230 millones de dólares a apoyar el Acuerdo. Los gobiernos de los estados y los territorios deberán igualar la financiación proporcionada por el Gobierno federal y dedicarla primordialmente a las mujeres y los niños víctimas de violencia en el hogar y la familia, y a los jóvenes sin hogar.

F. Refugiados y solicitantes de asilo (recomendaciones 38, 121 a 125, y 127 a 131)

122. Australia es uno de los tres principales países de reasentamiento en el mundo; a través del Programa Humanitario de Australia ha acogido a más de 825.000 refugiados y otras personas que han inmigrado por razones humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. El componente extraterritorial de ese programa facilita el reasentamiento en el extranjero de refugiados y de otras personas con necesidades humanitarias. Australia colabora con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para reasentar a los refugiados, dando prioridad a los que lleven mucho tiempo en esa situación, a los entornos urbanos y a otras personas que lo necesiten.

123. El Gobierno de Australia está decidido a que sigamos siendo uno de los tres principales países de reasentamiento en el mundo. A tal efecto, ha concretado la amplitud del Programa Humanitario en textos legislativos, en los que se cifra el cupo de visados humanitarios que se concederán en un mínimo de 16.250 en 2017-2018, y 18.750 en 2018-2019.

124. Australia sigue mejorando la equidad, la rendición de cuentas y la integridad del Programa Humanitario. La categoría de visados para mujeres en situación de riesgo es una de esas mejoras. Australia continúa siendo uno de los pocos países que dispone de un programa de reasentamiento para ayudar a las mujeres en situación de riesgo y a sus familiares a cargo. Australia también vela por la imparcialidad de su Programa Humanitario mediante la prestación de asistencia a la transición, atención médica y servicios conexos a los nuevos refugiados y a las personas que solicitan asilo por razones humanitarias. Australia tiene la firme voluntad de promover la dignidad y los derechos de los migrantes. A tal efecto participa activamente, por ejemplo, en la Iniciativa para los Migrantes en Países en Crisis, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Iniciativa Nansen sobre los Desplazamientos Transfronterizos Provocados por Desastres.

125. Australia está dispuesta a cumplir con las obligaciones en materia de protección internacional dimanantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de otros convenios pertinentes, en lo que respecta a las personas que solicitan protección dentro de su jurisdicción. Australia es consciente de la valiosa contribución de los migrantes a la sociedad, la cultura y la prosperidad australianas.

126. Desde el último EPU de 2011, el Gobierno de Australia ha puesto en marcha sólidas políticas de gestión de fronteras para detener las corrientes de inmigrantes ilegales que llegan por vía marítima⁶, eliminar el tráfico ilícito de personas y evitar la pérdida de más vidas en el mar. La realización de trámites en el extranjero y el asentamiento de refugiados en países distintos de Australia han disuadido a muchas personas de realizar el peligroso viaje por mar hasta Australia.

127. El Gobierno de Australia firmó los Acuerdos de Reasentamiento Regional con Papua Nueva Guinea en julio de 2013 y con Nauru el 3 de agosto de 2013⁷. En virtud de los memorandos de entendimiento suscritos, ambos países acuerdan tratar a los trasladados⁸ con dignidad y respeto, ajustándose a las normas pertinentes de derechos humanos, incluido el principio de no devolución.

128. El Gobierno de Australia ha ayudado a Nauru y Papua Nueva Guinea a dotarse de unos sólidos procesos de determinación de la condición de refugiado adaptados a las directrices del ACNUR mediante, por ejemplo, la formación y el acompañamiento del personal encargado de tomar esa decisión. El Gobierno de Australia también ha prestado apoyo a Nauru y a Papua Nueva Guinea para elaborar y aplicar sus medidas de apoyo al asentamiento, de manera que se atiendan las necesidades iniciales de los refugiados.

129. En septiembre de 2014, se firmó un memorando de entendimiento entre Australia y Camboya para el reasentamiento voluntario y permanente de refugiados de Nauru en Camboya.

130. Se ha establecido un proceso acelerado de evaluación al que pueden acogerse algunos de los inmigrantes ilegales que llegan por vía marítima, y el proceso de examen independiente del fondo de las solicitudes del Tribunal de Revisión de Asuntos de Refugiados se ha mejorado y se ha hecho más eficiente.

131. La gran mayoría de los solicitantes de asilo tienen acceso al examen independiente del fondo del Tribunal de Revisión de Asuntos de Refugiados. Los solicitantes de asilo también gozan del derecho constitucional a solicitar una revisión judicial de las decisiones sobre migración. Cuando una persona no invoca las obligaciones de Australia en materia de protección y no cuenta con un visado, no tiene derecho a permanecer en el país, y puede ser expulsada.

132. Australia cuenta con los procesos necesarios para garantizar que en todas las expulsiones se respeten las obligaciones de no devolución.

133. El Gobierno considera que la detención de inmigrantes es un componente fundamental de un control fronterizo robusto. Debe evaluarse el riesgo que pueden presentar para la sociedad australiana las personas que intenten entrar en el país sin autorización. El Gobierno se esfuerza por reducir el número de migrantes que mantiene en detención y el período de tiempo que permanecen en esa situación. La duración y las condiciones de detención de los inmigrantes están sujetas a exámenes periódicos para asegurarse de que la privación de libertad sigue siendo legítima y apropiada.

134. Australia se toma en serio las obligaciones que tiene respecto de los migrantes que se encuentran en detención. Los inmigrantes detenidos son alojados en diferentes tipos de instalaciones y se les asigna la clase de alojamiento que más se adecúe a sus circunstancias. Todas las personas que se encuentren en centros de detención de inmigrantes reciben una atención de la salud que en términos generales es equivalente a la proporcionada por el sistema público de salud de Australia.

135. Los inmigrantes detenidos pueden pedir una revisión judicial de la legalidad de su detención, y solicitar o rechazar tener acceso a su consulado y ser representados por este en cualquier momento.

136. Los niños que lleguen de manera ilegal son alojados inicialmente en centros de detención alternativos de menor seguridad, y se concede prioridad a que los niños no acompañados y, en la medida de lo posible, los que lleguen con sus familias, sean transferidos a regímenes de detención comunitaria, una vez realizados los controles de seguridad, identidad y estado de salud.

137. El programa de detención comunitaria de Australia permite que los niños no acompañados, los grupos familiares vulnerables y los adultos solos en situación de vulnerabilidad que se encuentren detenidos por motivos de inmigración residan y circulen libremente en la comunidad.

138. Desde la aprobación de legislación sobre la protección temporal a finales de 2014, se ha avanzado considerablemente en la reducción del número de menores detenidos. En diciembre de 2014, todos los niños que previamente se encontraban detenidos en la isla de Navidad habían sido ya trasladados a la parte continental del país, con sus familias.

139. Australia se ha comprometido a promover los intereses nacionales en materia de migración y refugiados a nivel internacional mediante un programa de actividades multilaterales y bilaterales, que incluye el fomento de la capacidad en determinados países. Para ello, se trabaja en estrecha colaboración con el ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y otros organismos internacionales, y países asociados, con el fin de:

- Promover que se gestionen las migraciones;
- Mejorar el funcionamiento del sistema de protección internacional para que se dé respuesta más equitativamente a las necesidades de protección de los refugiados;
- Responder al aumento de las necesidades globales de protección;
- Hacer un uso eficaz del reasentamiento;
- Desincentivar los desplazamientos secundarios; y
- Prestar un mayor apoyo a los países de primer asilo.

G. Ayuda externa y desarrollo (recomendaciones 135, 141 y 144)

140. En 2015-2016, Australia proporcionará unos 4.000 millones de dólares en asistencia oficial para el desarrollo, dirigida principalmente a las regiones del océano Índico y de Asia y el Pacífico. Las prioridades del programa de ayuda están en consonancia con el marco esbozado en la política de desarrollo del Gobierno titulada Asistencia de Australia: Promoción de la Prosperidad, Reducción de la Pobreza, Aumento de la Estabilidad. El programa de asistencia de Australia prestará especial atención al desarrollo del sector privado, incluida la ayuda para el comercio, pues reconoce que el sector privado es el principal motor del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Habida cuenta de la relación entre el desarrollo humano y el crecimiento económico, Australia invertirá en educación, salud, asistencia humanitaria y empoderamiento de las mujeres y las niñas. Australia procura crear capacidad en materia de derechos humanos mediante programas específicos en varios países, entre ellos China, Viet Nam, Myanmar y el Afganistán.

Notas

- ¹ Dr. HV Evatt, Australia's former Minister for External Affairs, was president of the United Nations General Assembly and chaired the session at which the Universal Declaration of Human Rights was adopted on 10 December 1948.
- ² Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles). Adopted by General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993.
- ³ As at 30 June 2013 persons born in the UK accounted for 5.3% of Australia's total population, persons born in New Zealand 2.6%, China 1.8%, India 1.6% and Vietnam 0.9%.
- ⁴ Figures sourced directly from National Congress of Australia's First Peoples, 27 March 2015.

- ⁵ The NDIS is being trialled in Western Australia alongside Western Australia's established scheme 'My Way' to determine the best scheme for Western Australians.
- ⁶ An Illegal Maritime Arrival is as an individual who has arrived in Australia by sea without a valid visa.
- ⁷ Settlement in Papua New Guinea is permanent, while settlement in Nauru is temporary pending resettlement in a third country.
- ⁸ A transferee means a person transferred to Nauru or Papua New Guinea under the Memoranda.
-